

Tratamiento y cesión de los datos por parte de las Haciendas Locales - Año 2000

En esta materia, como punto de partida, debe señalarse que el artículo 2.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, consagra el principio de que "Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de Derecho público debe percibir la Hacienda de las Entidades locales, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes".

Ello supone que, en el ejercicio de sus competencias, resultarán de aplicación a las Haciendas Locales las mismas prerrogativas que la Ley General Tributaria atribuye a la Hacienda Estatal, lo que tiene una enorme trascendencia en lo que se refiere a la aplicación de las normas reguladoras de la protección de datos de carácter personal.

Así, en cuanto al tratamiento de los datos por parte de las Haciendas Locales, este se somete a los principios contenidos en los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria, debiendo recordarse que, a tenor de lo establecido en el artículo 112.4 (introducido por la Disposición Adicional cuarta de la LOPD) "la cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento que se debe efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 111, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito tampoco será de aplicación lo que respecto a las Administraciones Públicas establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal".

Del mismo modo, tampoco será necesario obtener el consentimiento del afectado para recabar del mismo cuanta información de trascendencia tributaria sea necesaria para el desempeño por la Hacienda Local de sus competencias en materia tributaria, dada la obligación de declarar impuesta al contribuyente o su sustituto por la Ley General Tributaria y las normas reguladoras de cada Impuesto. Este tratamiento, amparado por la Ley, se fundaría en la excepción contenida en el artículo 6.2 de la LOPD que permite el tratamiento de los datos por la Administración Pública en el ejercicio de sus competencias.

Por otra parte, y en relación con la cesión de datos por parte de las Haciendas Locales, serán de aplicación en este caso las previsiones contenidas en el artículo 113 de la Ley General Tributaria, cuyo apartado primero limita los supuestos de cesión a los que expresamente se enumeran en ese precepto, en relación con "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones", limitando su utilización a la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada.

Del tenor de este precepto deben diferenciarse dos supuestos de cesión de datos por parte de las Haciendas Locales:

En caso de cesión a otras Administraciones Tributarias, esta cesión se encontraría amparada en todo caso en lo establecido en el artículo 113.1 b) de la Ley General Tributaria, cuando la cesión se ampare en el ejercicio por la cesionaria de sus competencias en materia tributaria.

En este mismo sentido, el artículo 8.1 de la LHL establece que "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las Administraciones tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales", aclarando el artículo 8.2 c) de la citada Ley que ambas Administraciones "se comunicarán inmediatamente, en la forma que reglamentariamente se establezca, los hechos con trascendencia tributaria para cualquiera de ellas, que se pongan de manifiesto como consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los respectivos servicios de inspección tributaria".

Por el contrario, si la cesión a otras Administraciones Públicas no tuviera fines tributarios, la cesión sólo podrá limitarse, estrictamente a los supuestos contenidos en el artículo 113.1, sin que los datos puedan ser utilizados por la Entidad Local para ninguna otra finalidad, dado que el citado artículo considera que dichos datos "sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada", lo que limita el alcance de la utilización de los datos a la gestión tributaria, pero nunca a la de otros ingresos de derecho público.